

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada Ponente

Auto - Ejecutivo	
EJECUTANTE	ARGEMIRO DE JESUS ORTIZ LEZCANO
EJECUTADO	AFP PORVENIR S.A. y la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
RADICADO	05001-31-05-019-2022-00260-01
TEMA	MANDAMIENTO DE PAGO
DECISIÓN	Revoca parcialmente

Medellín, catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir decisión de segunda instancia dentro del presente proceso ejecutivo laboral conexo, promovido por el señor **ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO**, contra **AFP PORVENIR S.A.** y la **NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 014**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I.- ANTECEDENTES

Mediante proceso ejecutivo laboral, el señor ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO, solicita se exija a las entidades MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., se sirvan proceder a la ejecución y/o cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado 19 Laboral de Oralidad de Medellín el día 03 de septiembre de 2021, confirmada en segunda instancia el día 25 de febrero de 2022 y el auto interlocutorio de fecha 29 de marzo de 2022 que ordena cumplir lo resuelto por el superior y fija agencias en derecho de primera instancia en la suma de \$908.526 a cargo de la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

En la sentencia de primera instancia cuya ejecución coactiva se persigue se había ordenado lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR que el demandante ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO, identificado con C.C. 8.303.082, cumple con los requisitos para ser beneficiario de bono pensional tipo A, con el fin de que tiempos cotizados al ISS hoy COLPENSIONES sean validados para el reconocimiento de prestaciones económicas dentro del RAIS.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES, a que proceda con la emisión, liquidación y pago de bono pensional en beneficio del Sr. ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO, con destino a la AFP PORVENIR S.A.

TERCERO: CONDENAR a PORVENIR S.A. a que una vez se proceda con el pago por parte de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público a esa entidad, pase a reconocerle y pagarle al Sr. ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO, la prestación a que haya lugar, esto es, una pensión de vejez o en su defecto una devolución de saldos, teniendo en cuenta para ello, los dineros que ya fueron recibidos por el actor por parte de la AFP debidamente actualizados conforme el IPC certificado por el DANE.

PARÁGRAFO: En el evento en que se determine que el demandante tiene derecho a la pensión de vejez, previó al disfrute deberá reintegrar la suma dineraria recibida por concepto de devolución de saldos, debidamente indexada, bien sea en único momento o en

su defecto estableciendo un acuerdo de pago con la AFP, ante la necesidad de estos recursos para el financiamiento de la prestación.

CUARTO: *ABSOLVER a la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES y a PORVENIR S.A., de las restantes prestaciones incoadas en su contra por el Sr. ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO.*

QUINTO: *ABSOLVER a COLPENSIONES EICE de las pretensiones incoadas en su contra por el Sr. ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO.*

SEXTO: *COSTAS a cargo de la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en beneficio del demandante. Se fijan agencias en derecho en la suma de \$908.526.*

SÉPTIMO: *Se ordena se surta el grado jurisdiccional de Consulta, al tratarse de una decisión en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.*

OCTAVO: *ORDENAR al Sr. ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO y a la AFP PORVENIR S.A., que adelanten el trámite correspondiente para la aprobación de la liquidación provisional de bono pensional, a efectos de que pueda procederse con la emisión, liquidación definitiva y pago del mismo.”*

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE ALZADA:

Mediante auto del 1° de agosto de 2022 (archivos PDF N° 02 del expediente digital), el JUZGADO DIECINUEVE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN – ANT., decidió librar el MANDAMIENTO DE PAGO en los siguientes términos:

“PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, *por la vía ejecutiva laboral, a favor de ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO identificada con C.C 8.303.082, en contra de PORVENIR S.A y NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, por los siguientes conceptos:*

NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- *Emisión, liquidación y pago de bono pensional en beneficio del señor ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO, con destino a la AFP PORVENIR S.A.*
- *Pago en la suma de \$908.526 por concepto de costas y agencias en derecho.*

AFP PORVENIR S.A

- *Reconocer la prestación a que haya lugar, esto es, la pensión de vejez o en su defecto la devolución de saldos, teniendo en cuenta para ello, los dineros recibidos por el actor por parte de la AFP debidamente actualizados conforme el IPC certificado por el DANE.*

SEGUNDO: *Notifíquese este auto por estados a la parte ejecutante y personalmente a PORVENIR S.A y NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, advirtiéndoles que disponen de un término de cinco (5) días para hacer el pago y diez (10) días para proponer excepciones. Notificación que estará a cargo del Despacho...”.*

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La referida decisión fue recurrida en apelación, por el apoderado judicial de la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, quien expresó su inconformismo, argumentando al respecto que el mandamiento de pago era improcedente en el *sub lite*, toda vez que en el NUMERAL 8° de la sentencia de primera instancia le había ordenado al demandante y a la AFP PORVENIR S.A., que adelantaren unos trámites tendientes a la aprobación de la liquidación provisional del Bono Pensional, a efectos de que se pueda proceder con la emisión y liquidación del Bono.

Tramites, que según el recurrente no han sido adelantados por las demás partes, y que han impedido el cumplimiento de la sentencia por parte de la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Que por mandamiento expreso del artículo 20 del Decreto 1513 de 1998 que modificó el artículo 48 del Decreto 1748 de 1995 (hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones), es una obligación de la Administradora de Pensiones agotar el trámite administrativo relacionado con la solicitud de Liquidación, Emisión y Redención (pago) del bono pensional del afiliado(a), ante la entidad emisora del mismo, reportando para el efecto, en forma correcta y completa la Historia Laboral verificada y certificada, así:

“...Corresponde a las entidades administradoras adelantar por cuenta del afiliado, pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su redención. Las administradoras estarán obligadas a verificar las certificaciones que expidan las entidades empleadoras o cajas, de tal manera que cuando sean recibidas por el emisor, sólo sea necesario proceder a la liquidación provisional del bono y a la solicitud de reconocimiento de cuotas partes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52...”. (DESTACA OBP)

Se expone en la alzada, que en cumplimiento a lo resuelto en la sentencia que presta mérito ejecutivo, la Oficina de Bonos Pensionales, procedió a “INHIBIR” los controles que tenía el bono pensional del ejecutante que impedían su Liquidación y Emisión, tal como se evidencia en el Print de pantalla adjunto al recurso, situación que le fue informada a la AFP PORVENIR S.A. el día 23 de junio de 2022, no obstante, desde la citada fecha el fondo privado no ha generado a través del sistema de bonos la Liquidación Provisional del bono pensional del señor ARGEMIRO DE JESUS ORTIZ LEZCANO, mucho menos la solicitud de EMISIÓN - REDENCIÓN (pago) del bono pensional Tipo A modalidad 2 al que tiene derecho su afiliado, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 14 del Decreto 1474 de 1997 y el artículo 22 del Decreto 1513 de 1998, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 7 del Decreto 3798 de 2003 (hoy recopilados en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones), toda vez que la EMISIÓN de bonos pensionales no es un trámite que pueda adelantarse de manera oficiosa.

También argumentó el recurrente que de conformidad con lo ordenado en el NUMERAL OCTAVO de la parte resolutive de la sentencia primera instancia, al ejecutante le correspondía ejercer las siguientes acciones: **1).** Solicitar a la AFP PORVENIR S.A., una liquidación provisional del bono pensional, **2).** Verificar que toda la historia laboral se encuentre correctamente incluida en la liquidación del bono pensional que la AFP le está presentando, **3).** Una vez, se tenga dicha liquidación se debe revisar con el fin de establecer si están relacionadas todas las entidades donde laboró, **4).** Autorizar por escrito la solicitud de emisión del bono pensional tipo A. (La información relacionada con este trámite debe ser suministrada por la AFP PORVENIR S.A.), y finalmente **5).** El emisor del bono, hará las confrontaciones del caso y si este se encuentra emitible, si no hay inconsistencias en el mismo, entonces procederá a darle el correspondiente trámite a la emisión del bono pensional con observancia de la Ley.

Advirtiendo el recurrente, que a la fecha la AFP PORVENIR S.A., no ha solicitado a través del sistema de bonos pensionales de esta oficina ni la liquidación del bono ni su emisión.

En relación a las costas procesales de la primera instancia, afirmó que dicho mandamiento es improcedente, al no haber transcurrido los 10 meses desde la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, para poder ejecutar a entidades de derecho público, de conformidad con el artículo 307 del Código General del Proceso.

Mediante auto del 19 de septiembre de 2022 (expediente digital – archivo PDF 08), el Juez de Primer Grado dispuso la remisión del expediente ante este Tribunal de Distrito Judicial, para surtirse el recurso de alzada correspondiente.

Alegatos de conclusión:

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada judicial de la parte ejecutante presentó su escrito de alegaciones en segunda instancia, solicitando se deje en firme el auto del 1° de agosto de 2022 por medio del cual se libró mandamiento de pago, para lo cual se deberá oficiar a la AFP PORVENIR S.A. para que manifieste si el Ministerio de Hacienda ya procedió a cancelar el bono pensional al señor ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO y de esta forma demostrar que quien ha impedido el cumplimiento de la sentencia ha sido la entidad pública, quien tampoco ha afectado el pago de las costas procesales.

También expone en su escrito de alegaciones, que a la fecha la entidad demandada (MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OBP) no ha demostrado intención alguna de pagar la condena impuesta por la agencia judicial de primera instancia.

A su turno, el apoderado judicial de la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, aprovechó la oportunidad procesal para poner en conocimiento del despacho, la ocurrencia de unos hechos sobrevinientes, que deberán ser tenidos en cuenta a efectos de revocarse el auto de fecha 1 de agosto de 2022, pues con posterioridad a la presentación del recurso de apelación, la AFP PORVENIR S.A., el día 29 de septiembre de 2022, solicitó la emisión del Bono Pensional, el cual fue emitido y pagado en octubre de 2022, a través de la resolución No. 28081 del 21 de octubre de 2022.

En cuanto al pago de costas en contra del Ministerio, hay que establecer que dicha entidad expidió la resolución 3249 del 2 de diciembre de 2022, ordenando el pago de NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. (\$908.526), suma que fue consignada en la cuenta de depósitos judiciales N° 50012032019 del Banco Agrario de Colombia a órdenes del Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito Judicial de Medellín, a nombre del beneficiario de la condena, señor ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesa, pasa la Sala a resolver, previas las siguientes

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La controversia jurídica a resolver en esta instancia judicial, se circunscribe estrictamente a la apelación presentada a instancias de la ejecutada la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, sobre el auto interlocutorio a través del cual el A *Quo* decidió de librar mandamiento de pago contra el referido Ministerio y la AFP PORVENIR S.A., al estimar satisfechos los requisitos que debe tener el título ejecutivo, providencia que en efecto es apelable, al tenor de lo dispuesto por el numeral 8° del artículo 65 del CPTSS.

Sea lo primero, -a efectos de resolver lo pertinente-, que un documento aducido como TÍTULO EJECUTIVO debe gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales.

Las **condiciones formales** consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación (i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme.

Las **condiciones sustanciales** exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible.

Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos. Las segundas, exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser **clara, expresa y exigible**.

Conforme a la jurisprudencia nacional, el “*que la obligación sea expresa, quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente. Que sea clara: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta*” (Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 22 de junio de 2001, Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque, Radicado 44001-23-31-000-1996-0686-01(13436).

Y en esos precisos términos se encuentra redactado el concepto de TÍTULO EJECUTIVO, en nuestro estatuto procesal, art. 422 del Código General del Proceso, veamos:

“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”

Y luego de verificarse la existencia o no de un título ejecutivo, le corresponde al funcionario judicial de conocimiento, librar el mandamiento de

pago correspondiente, el cual debe estar acorde a los lineamientos procesales contenidos en el art. 430 del Código General del Proceso, veamos:

“ARTÍCULO 430. MANDAMIENTO EJECUTIVO. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.

Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.

(...)”. (Negrillas y subrayas de la Sala).

CASO CONCRETO

El en presente asunto el TÍTULO JUDICIAL cuyo cobro coactivo persigue la parte ejecutante, lo constituye la sentencia de primera instancia de fecha 3 de septiembre de 2021 proferida por el JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, confirmada en segunda instancia mediante sentencia del 25 de febrero de 2022, donde se ordenó lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR que el demandante ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO, identificado con C.C. 8.303.082, cumple con los requisitos para ser beneficiario de bono pensional tipo A, con el fin de que tiempos cotizados al ISS hoy COLPENSIONES sean validados para el reconocimiento de prestaciones económicas dentro del RAIS.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES, a que proceda con la emisión, liquidación y pago de bono pensional en beneficio del Sr. ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO, con destino a la AFP PORVENIR S.A.

TERCERO: CONDENAR a PORVENIR S.A. a que una vez se proceda con el pago por parte de la Nación – Ministerio de

Hacienda y Crédito Público a esa entidad, pase a reconocerle y pagarle al Sr. ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO, la prestación a que haya lugar, esto es, una pensión de vejez o en su defecto una devolución de saldos, teniendo en cuenta para ello, los dineros que ya fueron recibidos por el actor por parte de la AFP debidamente actualizados conforme el IPC certificado por el DANE.

PARÁGRAFO: En el evento en que se determine que el demandante tiene derecho a la pensión de vejez, previó al disfrute deberá reintegrar la suma dineraria recibida por concepto de devolución de saldos, debidamente indexada, bien sea en único momento o en su defecto estableciendo un acuerdo de pago con la AFP, ante la necesidad de estos recursos para el financiamiento de la prestación.

CUARTO: ABSOLVER a la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES y a PORVENIR S.A., de las restantes prestaciones incoadas en su contra por el Sr. ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO.

QUINTO: ABSOLVER a COLPENSIONES EICE de las pretensiones incoadas en su contra por el Sr. ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO.

SEXTO: COSTAS a cargo de la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en beneficio del demandante. Se fijan agencias en derecho en la suma de \$908.526.

SÉPTIMO: Se ordena se surta el grado jurisdiccional de Consulta, al tratarse de una decisión en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

OCTAVO: ORDENAR al Sr. ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO y a la AFP PORVENIR S.A., que adelanten el trámite correspondiente para la aprobación de la liquidación provisional de bono pensional, a efectos de que pueda procederse con la emisión, liquidación definitiva y pago del mismo.”

Sin embargo, el cumplimiento de las ordenes contenidas en los NUMERALES SEGUNDO y TERCERO relativas a la emisión, liquidación y pago de bono pensional a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el reconocimiento y pago de una pensión de vejez en su defecto una devolución de saldos a cargo de la AFP PORVENIR S.A., eran obligaciones condicionales, es decir, aquellas que se encontraban supeditadas al cumplimiento de una

condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no, conforme la definición legal de “obligación condicional” contenida en el art. 1.530 del Código Civil.

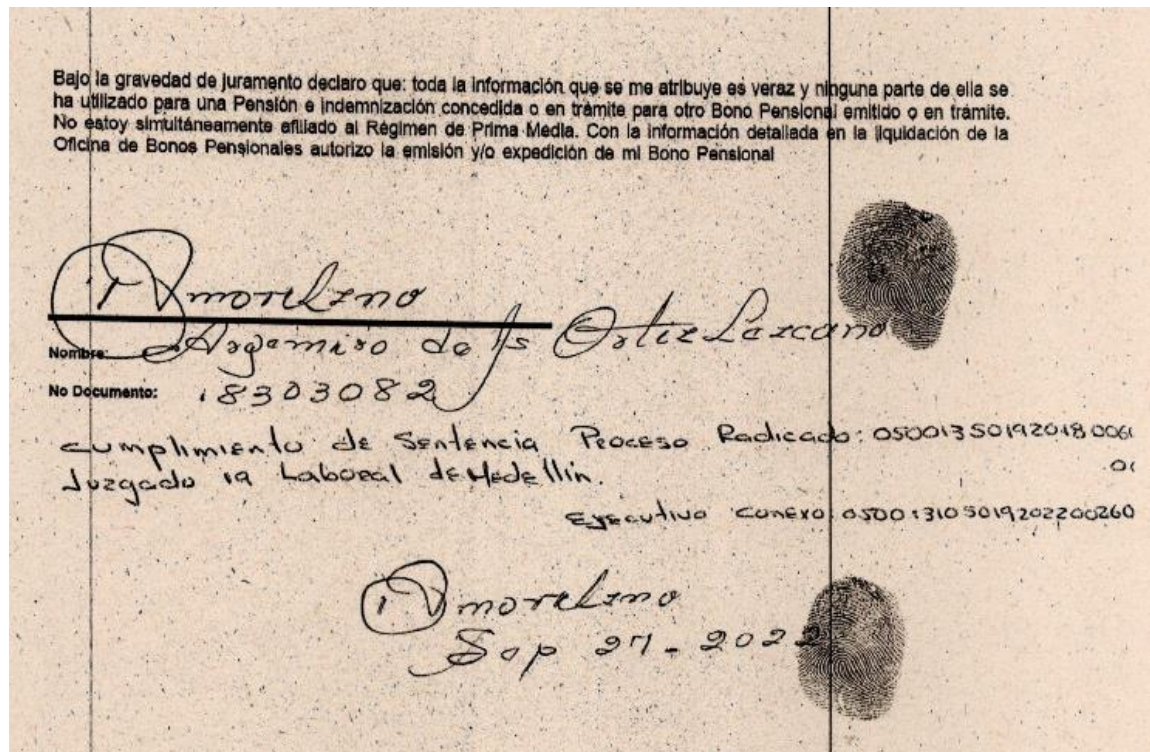
Lo que significa que no puede predicarse el incumplimiento hasta tanto se cumpla la condición que hace exigible la obligación, que en el caso concreto era aquel condicionamiento contenido en el NUMERAL OCTAVO de la sentencia de primera instancia.

“OCTAVO: ORDENAR al Sr. ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO y a la AFP PORVENIR S.A., que adelanten el trámite correspondiente para la aprobación de la liquidación provisional de bono pensional, a efectos de que pueda procederse con la emisión, liquidación definitiva y pago del mismo.”

Advirtiéndolo la Sala con el escrito de la demanda, no se allegó ningún documento que permitiera inferir la realización de los trámites legales tendientes a la aprobación de la liquidación provisional de bono pensional, tal como se había ordenado en el numeral octavo de la parte resolutive de la sentencia que presta el mérito ejecutivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.16.7.8. del Decreto 1833 de 2016, por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones, veamos:

“...ARTÍCULO 2.2.16.7.8. Liquidación provisional y emisión de bonos. La solicitud de emisión de un bono, deberá estar acompañada de una manifestación del beneficiario ante la Administradora en el sentido de que el titular del bono no se encuentra afiliado a otra administradora, ni se encuentra tramitando, él o sus sobrevivientes, una pensión, indemnización sustitutiva o devolución de aportes o saldos, que sea incompatible con el bono. Dicha declaración, tendrá los efectos previstos en el artículo lo del Decreto-ley 019 de 2012...”

Trámites que apenas se adelantaron con posterioridad a la presentación de la demanda ejecutiva laboral, y del auto que libró el mandamiento de pago, según se aprecia a folios 10 del archivo PDF 011, así:



Visto lo anterior, es claro para la Sala que el título ejecutivo cuya ejecución coactiva se persigue, no era un título simple (providencias judiciales), como se indicó en el escrito introductorio, sino que se trataba de un título complejo, del que también hacían parte una serie de documentos relacionados con gestiones administrativas tendientes a obtener la liquidación provisional y emisión de bono pensional.

Por lo tanto, para poder determinar la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a favor del ejecutante en los términos del art. 422 del CGP, y librar el mandamiento de pago correspondiente, era necesario realizar un análisis conjunto de la totalidad de documentos que constituían el TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO, estudio que en el presente asunto no se practicó, al echarse de menos la obligación condicional contenida en el NUMERAL OCTAVO de la parte resolutive de la sentencia ordinaria de primer grado, de cuyo cumplimiento dependía la realización de las obligaciones contenidas en los numerales SEGUNDO y TERCERO de la misma providencia que estaban a cargo de las ejecutadas AFP PORVENIR S.A. y la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Motivos por los cuales, se accederá parcialmente al recurso de apelación propuesto, en relación al mandamiento de librado por los siguientes conceptos

NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- *Emisión, liquidación y pago de bono pensional en beneficio del señor ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO, con destino a la AFP PORVENIR S.A.*

AFP PORVENIR S.A

- *Reconocer la prestación a que haya lugar, esto es, la pensión de vejez o en su defecto la devolución de saldos, teniendo en cuenta para ello, los dineros recibidos por el actor por parte de la AFP debidamente actualizados conforme el IPC certificado por el DANE.*

Y se mantendrá incólume el mandamiento de pago frente a la condena en costas procesales a cargo de la NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, pues dicha obligación era pura y simple, y el título ejecutivo que la contiene si es constitutivo de una obligación, clara, expresa y exigible.

Advierte la Sala que si bien la ejecutada, manifiesta haber realizado el pago de esta condena a través de consignación judicial a favor del ejecutante, este hecho sobreviniente no tiene ninguna incidencia de tipo procesal frente al recurso de apelación propuesto, por el contrario, tal circunstancia deberá ser alegada por vía de excepción en la oportunidad procesal correspondiente, por cuanto la EXCEPCIÓN DE PAGO es una de las excepciones que pueden alegarse en aquellos procesos donde se pretenda el cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, conforme lo señalado en el numeral 2° del art. 442 del Código General del Proceso, o también, puede ser objeto de pronunciamiento por parte del juez de primera instancia.

Sin costas en esta instancia, al haber prosperado parcialmente el recurso de apelación propuesto.

V. DECISIÓN

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR parcialmente el auto interlocutorio objeto de apelación de fecha 1° de agosto de 2022, proferido por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín – Ant., en cuanto libró mandamiento de pago por los siguientes conceptos:

“NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- *Emisión, liquidación y pago de bono pensional en beneficio del señor ARGEMIRO DE JESÚS ORTIZ LEZCANO, con destino a la AFP PORVENIR S.A.*

AFP PORVENIR S.A

- *Reconocer la prestación a que haya lugar, esto es, la pensión de vejez o en su defecto la devolución de saldos, teniendo en cuenta para ello, los dineros recibidos por el actor por parte de la AFP debidamente actualizados conforme el IPC certificado por el DANE.”*

Para en su lugar declarar probada la inexistencia de título ejecutivo complejo frente a estas obligaciones, según lo expuesto en procedencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el auto interlocutorio objeto de apelación de origen y fecha conocidos.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: Se ordena notificar lo resuelto en **ESTADOS** virtuales y la devolución del expediente al juzgado de origen.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 062 del 17 de Abril de 2023.

Consultable aquí:

[https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147.](https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147)